XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009.

El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989 – 2001).

Piva, Adrián.

Cita:

Piva, Adrián (2009). *El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989 – 2001). XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-008/1293

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org*.

El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989 – 2001).

Adrián Piva

Especialmente en la tradición marxista, pero más en general en los diversos abordajes del conflicto social y de la acción colectiva desafiante, la "huelga general" ha tenido un lugar destacado. En la Argentina, la fuerte presencia histórica de la clase obrera sindicalmente organizada la ha puesto en un lugar central en los estudios del conflicto y la protesta sociales, son de destacar, en este sentido, los trabajos de Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo. En esta ponencia nos preguntamos si entre 1989 y 2001 las huelgas generales han seguido constituyendo un indicador fiable para la periodización del conflicto obrero. Para ello, nos proponemos, en primer lugar, analizar la evolución de la conflictividad obrera en el período comprendido entre 1989 y 2001, con el fin de establecer una periodización general y por fracciones. En segundo lugar, contrastar la evolución de la conflictividad obrera con la acción de las centrales sindicales para los períodos enero de 1984 – mayo de 1989 y junio de 1989 – diciembre de 2001. Por último, intentar dar cuenta de los cambios en la relación entre conflictividad obrera y acción de las cúpulas sindicales.
A fin de comprender estas transformaciones en los patrones de conflictividad de la clase obrera y en la acción de las cúpulas sindicales prestaremos especial atención a su inscripción en el nexo entre acumulación de capital y hegemonía.

A- La evolución cuantitativa del conflicto obrero y la reproducción ampliada del capital

Una primera aproximación general a la evolución cuantitativa del conflicto obrero en el período muestra, en primer lugar, una tendencia general a la disminución del grado de

respuesta de la clase obrera tanto respecto de la década del ’80 como a lo largo del período y, en segundo lugar, dos etapas bien diferenciadas en términos cuantitativos. Una primera etapa, hasta 1995, que se caracteriza por el aumento del número de conflictos defensivos y la caída de los conflictos salariales. Esta dinámica condujo a un ciclo de aumento del número de conflictos laborales entre 1992 y 1994 - año que presenta el mayor número de conflictos laborales del período 1989-2001 - y a un inicio del descenso de la conflictividad laboral en 1995, año que presenta el mayor número de conflictos defensivos. La segunda etapa, a partir de 1996, muestra un descenso de ambos tipos de conflicto y da inicio a un período de baja conflictividad laboral relativa que no es revertida por el ascenso de la conflictividad laboral en 2001.

El primer fenómeno - la disminución del grado de respuesta de la clase obrera respecto de la década del ’80 y a lo largo del período estudiado – remite a la alteración radical de la relación de fuerzas a partir del estallido hiperinflacionario de 1989. La inflexión en la relación de fuerzas en 1989/1990 sobre la base de la amenaza hiperinflacionaria, su consolidación con la emergencia de un consenso en torno al programa neoconservador de salida de la crisis y la cristalización de este consenso en el apoyo a la "estabilidad" a partir del lanzamiento de la convertibilidad en abril de 1991, posibilitaron la ofensiva del capital entre 1992 y 1995 que transformó radicalmente el modo de acumulación y su corazón: las formas concretas de explotación de la fuerza de trabajo. A su vez, esta transformación de las formas de explotación y de las condiciones de acumulación de capital completó la coerción hiperinflacionaria con la amenaza del desempleo y la fragmentación de la clase obrera, lo que indujo la aceptación de la ofensiva del capital en los lugares de trabajo.

Sin embargo, este repliegue de la clase obrera y la transformación de sus patrones de conflictividad respecto de la década del ’80 no procedieron de manera automática ni se desarrollaron libres de intentos de fracciones de los asalariados y de sus direcciones de resistir la reestructuración capitalista.

En primer término, sobre todo entre 1989 y 1991 y en menor medida durante toda la primera mitad de los ’90, se desarrollaron importantes huelgas y planes de lucha, los más grandes, contra las privatizaciones. Dos conflictos resultaron especialmente importantes por su magnitud y por su impacto político: el plan de lucha de 1989 contra la privatización de ENTEL, llevado adelante por el sindicato telefónico de la regional Buenos Aires, y la larga

huelga de los ferroviarios en 1991 contra la privatización de los ferrocarriles. Ambas luchas terminaron en rotundas derrotas que, en el enfrentamiento, significaron la realización de la relación de fuerzas alumbrada por la hiperinflación. En este sentido, no puede subestimarse el impacto de estas derrotas sobre el conjunto de los trabajadores. Si ellas mismas no pueden explicarse sin recurrir a las consecuencias de la derrota hiperinflacionaria, la consolidación de esta derrota no puede entenderse sin esas otras derrotas que demostraron, cabalmente, que se había producido un cambio de etapa.

En segundo término, la adecuación de las direcciones sindicales al nuevo escenario sólo se impuso después de la derrota de la CGT ubaldinista. A poco de asumir el gobierno de Menem, el predominio al interior de la CGT de la estrategia neoparticipacionista de "los 15" dio lugar, en lo inmediato, a la fractura de la central y a la constitución de la "CGT Azopardo", dirigida por Saúl Ubaldini y acompañada por la UOM de Lorenzo Miguel hasta noviembre de 1990. Esta central buscó conservar el viejo vínculo "vandorista" entre estado y sindicatos y se opuso, desde posiciones peronistas ortodoxas, al programa de reformas, en particular, a las privatizaciones. Hacia fines de 1990, aislada políticamente e incapaz de sostener un proceso de movilización que la fortaleciera frente al estado, se disolvía luego de que el grueso de los sindicatos que la conformaban emigraran a la oficialista CGT San Martín.

Los dos últimos conjuntos de hechos son de gran importancia para entender: A- cómo el estado hizo valer la alteración de la relación de fuerzas durante el período hiperinflacionario y B- cómo esta efectivización de la relación de fuerzas fue condición para la traducción de las transformaciones estructurales de la clase obrera – fragmentación estructural y crecimiento del ejercito industrial de reserva – en una fragmentación y debilitamiento de las luchas de los asalariados.

Reconsideremos, entonces, el proceso de conjunto. La hiperinflación – desde el punto de vista de la acción como clase de los asalariados - constituyó la derrota/fracaso de la estrategia dominante de la clase obrera frente a la crisis final del "modelo sustitutivo de importaciones", a saber, una estrategia centrada en la lucha salarial y ligada a la defensa del viejo patrón de acumulación. En la medida que el éxito de esta estrategia se traducía en hiperinflación e hiperdevaluación de la moneda, la acción de la clase obrera perdía capacidad hegemónica al tiempo que ganaba potencialidad hegemónica la alternativa

neoliberal de salida de la crisis. En el marco del amplio consenso alrededor del programa de reestructuración del capital y de la sólida unidad burguesa constituida en torno a él, la respuesta de la clase obrera fue la fractura sindical y la dispersión y caída generalizada del conflicto. Esta alteración de la relación de fuerzas se efectivizó en las derrotas de los intentos de resistencia de fracciones de los trabajadores a las privatizaciones y del intento de defensa de la estrategia sindical vandorista por el ubaldinismo. La efectivización de la nueva relación de fuerzas por el estado tuvo, entonces, un doble efecto: En primer lugar, fue la base sobre la que se desarrolló la reestructuración capitalista que tuvo como una de sus consecuencias la fragmentación estructural de la clase obrera y el aumento del desempleo. En segundo lugar, y al mismo tiempo, la derrota de la resistencia organizada de los trabajadores y la intervención del estado en favor de la estrategia neoparticipacionista de vinculación de los sindicatos al estado fue condición de posibilidad de la fragmentación del conflicto obrero y del fuerte impacto del desempleo sobre su capacidad de acción.

El segundo fenómeno observado, la existencia de dos etapas bien diferenciadas en términos del número de conflictos, aparece vinculado a este último hecho: el impacto del aumento del desempleo. En los años 1994 y 1995 la tasa de desempleo experimentó un salto que la llevó a niveles del 17% y 18%. A partir de 1996, con la nueva fase expansiva de la economía, descendería - aunque nunca debajo del 12% - para después comenzar a crecer, nuevamente, con la larga recesión iniciada a fines de 1998. Si en la primera etapa la amenaza hiperinflacionaria, la fragmentación de la clase obrera y el desempleo creciente llevaron a un descenso de los conflictos – motivados por aumento de salarios – y a un aumento de los conflictos defensivos – motivados por despidos y por atrasos en el pago salarial –, a partir de 1996, consolidadas las elevadas tasas de desempleo, cayó el número de todos los conflictos y nunca recuperaron la magnitud de los años 1992, 1993 y 1994.

Sin embargo, también desde 1996, se observa una segmentación del conflicto obrero. Mientras decrece el número de conflictos protagonizados por obreros ocupados, aumenta la cantidad de conflictos de los trabajadores desocupados.

Esta diferenciación en dos etapas de la evolución cuantitativa del conflicto obrero y su relación con las etapas del modo de acumulación nos permite precisar el vínculo entre acumulación de capital y hegemonía.

En primer lugar, la disminución del grado de respuesta de la clase obrera a la ofensiva del capital - descenso general de la conflictividad de los ocupados que por su peso numérico determina una caída general de las luchas de los asalariados - fue fundamental para sostener la acumulación de capital en la fase expansiva de 1996-1998, cada vez más dependiente de la producción de plusvalor absoluto y de la caída del salario nominal para compensar el aumento de la brecha de productividad internacional.

Esto significa que la reproducción ampliada del capital como proceso económico-político descansó, cada vez más, en los mecanismos de coerción sobre la clase obrera: amenaza hiperinflacionaria, fragmentación y alto desempleo. En la primera etapa se observa una leve tendencia al aumento del salario real junto a un crecimiento de la tasa de plusvalor. Esto indica la posibilidad de articular los mecanismos coercitivos de producción de consenso con una cierta capacidad de otorgar concesiones. En la segunda etapa, en un contexto de desaceleración del aumento de la productividad del trabajo y frente a las primeras devaluaciones competitivas en el sudeste asiático, el salario real cae aun durante la fase expansiva de 1996-1998.

Pero, en segundo lugar, el crecimiento de las luchas de los desocupados, durante la segunda mitad de la década del ’90, señala los límites de una hegemonía fundada, de modo predominante, en mecanismos productores de consenso negativo. Estos ya se habían puesto de manifiesto frente a los estallidos provinciales en la primera mitad de los ’90, pero se evidenciarían, especialmente, a partir del cambio de etapa en la lógica política de dichos conflictos a partir de 1996/1997, como observáramos en el capítulo anterior.

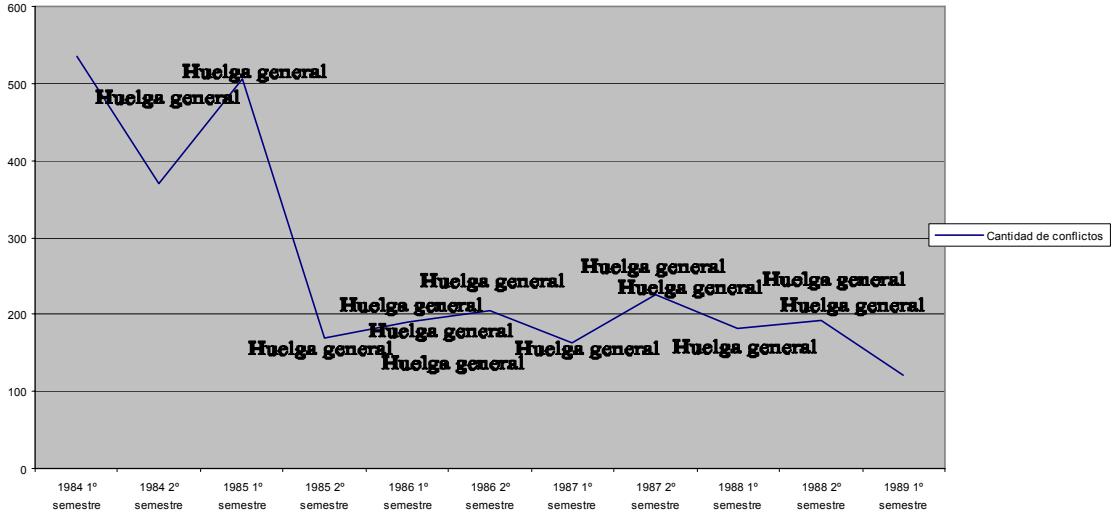
B- Huelgas generales y conflicto obrero en los ’80 y en los ’90

No es posible, para ningún período histórico, establecer una correlación simple entre huelgas generales – su convocatoria, acatamiento y grado de aislamiento - y conflictividad obrera. Sin embargo, la actividad huelguística de la CGT en los años ‘90, por su relación con la evolución de la conflictividad de los asalariados, parece mostrar pocas

probabilidades de ser un buen indicador de los ciclos de lucha de la clase obrera. Una contrastación de esta relación para los ’80 y los ’90 puede ser útil para iniciar una discusión sobre los cambios en el comportamiento sindical y su vínculo con las transformaciones en el modo de acumulación, los cambios en la estructura de clases – en particular la composición de la clase obrera – y en el vínculo estado-sindicatos. Compararemos nuestros resultados con los del trabajo de Iñigo Carrera (2002), en el que el autor intenta una periodización de las luchas obreras en los ’80 y los ’90 tomando como indicador las huelgas generales, ya que nos permitirá discutir la relación entre huelgas generales y conflicto obrero y, a través de ella, la relación entre la acción de las cúpulas sindicales y la conflictividad de los asalariados.

El Gráfico 1 describe la evolución semestral del conflicto obrero entre 1984 y el 1º semestre de 1989. A lo largo de la línea, se han marcado las huelgas generales convocadas por la CGT en cada semestre.

Gráfico 1: Evolución semestral de conflictos laborales (1984 – 1989)
Con detalle de huelgas generales



Fuente: elaboración propia en base a datos de Villanueva (1994) y Iñigo Carrera (2002)

Una primera observación, nos muestra que la conflictividad obrera presenta altos niveles relativos entre el primer semestre de 1984 y el 1º semestre de 1985. Luego adquiere cierta estabilidad para, finalmente, iniciar un sendero decreciente en el primer semestre de 1988 que, como sabemos, se prolongará más allá de 1989. Los relativamente altos niveles de los tres primeros semestres pueden atribuirse al importante proceso de movilización del retorno a la democracia y a la aceleración inflacionaria de los primeros dos años de gobierno alfonsinista. La caída de la conflictividad del 2º semestre de 1985 coincide con el lanzamiento del Plan Austral y el descenso de la inflación (Villanueva 1994). Sin embargo, los dos semestres de 1986 muestran nuevos incrementos del conflicto aunque lejos de los niveles de la vuelta a la democracia.

El incremento del desempleo y el subempleo, a partir de 1988, y el fracaso de la estrategia sindical frente a la escalada inflacionaria – transformada en crisis hiperinflacionaria en 1989 – dan cuenta de la caída de la conflictividad de fines de los ’80.

Respecto de las huelgas generales, en primer lugar, la observación de su secuencia en el Gráfico1 muestra que la actividad huelguística de la CGT es permanente, registrándose huelgas en todos los semestres, excepto en el 1º semestre de 1989. En segundo lugar, la periodización realizada por Iñigo Carrera - tomando como indicadores la convocatoria a huelgas generales y su acatamiento, la unidad de los cuadros sindicales y grado de

aislamiento que se manifiestan en ellas - si bien presenta algunas diferencias con la evolución de la cantidad de conflictos protagonizados por asalariados, también mantiene importantes similitudes. Dice Iñigo Carrera: "De manera que lo que puede observarse entre 1984 y 1988 es un momento ascendente (mayor unidad y menor aislamiento) que se prolonga desde los finales del gobierno militar; 1986 se constituye en un punto de inflexión: en marzo comienzan a expresar su alineamiento en contra de la lucha de los obreros algunas fracciones sociales y en la última huelga del año puede observarse el comienzo de una fractura en los cuadros sindicales, que se expresa también en una caída en el acatamiento a la huelga general y, sobre todo, en el número de movilizados. El grado de fractura entre los cuadros sindicales se incrementó en 1987, y aunque la huelga de noviembre pareció revertirla, la última huelga del año mostró un mayor aislamiento de los obreros. Finalmente, fractura y aislamiento social señalan la última huelga general, en septiembre de 1988. El comienzo de 1989 encuentra a los obreros en el momento de menor grado de unidad de sus cuadros económico profesionales y de mayor aislamiento respecto de otras fracciones sociales. Debe tenerse presente, sin embargo, que el acatamiento a la huelga general entre 1984 y 1989 nunca fue menor al 50% de los trabajadores" (Iñigo Carrera 2002: 119-120). Si bien no hay una relación *vis a vis*, existe un vínculo importante entre la acción huelguística de la CGT y la evolución del conflicto obrero entre 1984 y 1989. Al mismo tiempo, la acción de la clase obrera presenta un predominio, decreciente y perdido hacia el fin del período, de los trabajadores del sector privado - sobre todo el industrial - y una representación unificada en la CGT.

La situación es muy diferente cuando observamos esta misma relación para el período 1989 – 2001. De acuerdo al análisis de Iñigo Carrera (2002), desde 1989, el pico del ciclo de auge de las luchas de la clase obrera, iniciado en diciembre de 1993 con el "Santiagazo", se hallaría en 1996. Ese año, junto con 1995, sería el de mayor actividad huelguística de la CGT, cuyas huelgas fueron apoyadas por la CTA y el MTA, lo que indicaría, además, un alto grado de unidad de los cuadros sindicales. El acompañamiento de un amplio espectro y un importante número de organizaciones políticas y sociales (UCR, FREPASO, FUA, Organizaciones de DDHH, etc.) mostraría, también, a ese año como el de menor aislamiento del movimiento obrero hasta ese momento. El segundo ciclo de auge, iniciado en diciembre de 1999 con los enfrentamientos en el puente de Corrientes, tendría su punto

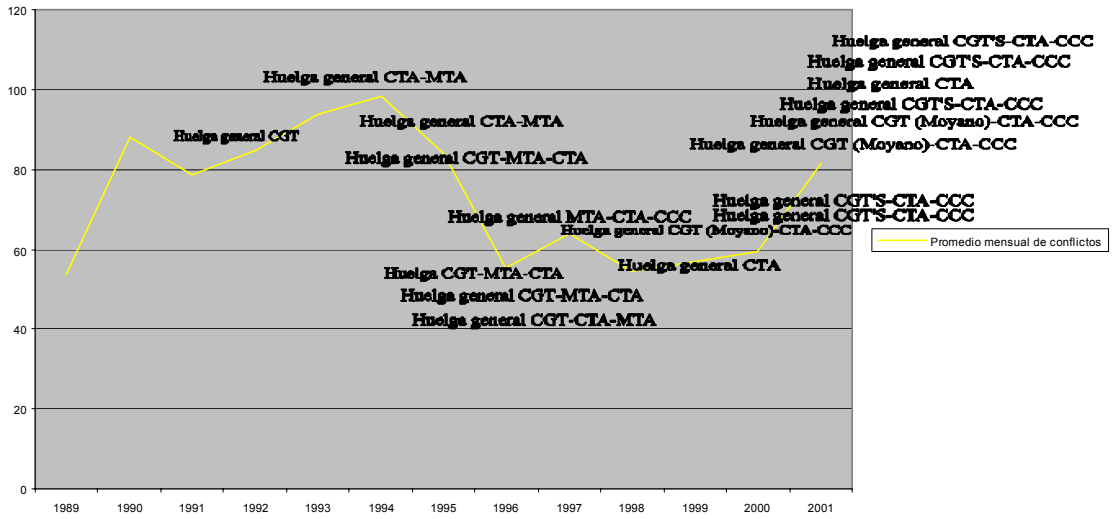
más alto en el año 2001 y coincidiría con un nuevo pico de actividad huelguística de las centrales sindicales, un mayor grado de unidad de sus cuadros dirigentes y menor aislamiento.

En primer lugar, el análisis de las huelgas generales desde 1989 se complejiza debido a la fractura del movimiento sindical. Como dijimos antes, la primera respuesta de la CGT frente al inicio del proceso de reformas del gobierno menemista fue la fractura. La CGT San Martín (oficialista) tendió a desarrollar una estrategia negociadora mientras que la CGT Azopardo intentó una estrategia de confrontación.[1] Poco más de un año después, a fines de 1990, la CGT Azopardo se disolvía y la mayoría de los sindicatos se integraban a la ahora única CGT oficialista. Sin embargo, ATE y CTERA, más un conjunto de seccionales y activistas de diversos sindicatos, iniciarían la construcción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).[2] Lo que distingue esta fractura de la CGT de otras anteriores es que la CTA manifestó, desde el inicio, la voluntad de constituir una central alternativa. Por otra parte, entre fines de 1993 y comienzos de 1994 se produjo una escisión en la CGT que dio origen al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Si bien este agrupamiento nunca manifestó su intención de romper definitivamente con la CGT, desde ese momento y durante la mayor parte del período, actuó con autonomía de la dirección cegetista. Por último, habría que agregar a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con presencia en el movimiento sindical, fundamentalmente en el noroeste, y sobre todo en el movimiento de desocupados, a partir de la segunda mitad de los ’90.

Si tomamos el período comprendido por los años 1989-1996 y observamos la relación entre la acción huelguística de la CGT - que nucleaba al grueso de los sindicatos y representaba formalmente a la mayoría de los trabajadores sindicalizados - con la evolución de la conflictividad obrera (Gráfico 2) observamos que se obtienen dos periodizaciones opuestas.

[1] Una hipótesis sobre el contenido de estas estrategias será tratada en la última sección.
[2] Inicialmente Congreso de los Trabajadores Argentinos.

Gráfico 2: Evolución anual de conflictos laborales (1989 – 2001)
Con detalle de huelgas generales



Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de conflictos laborales (CEI – UNQ) e Iñigo Carrera (2002).

Mientras para Iñigo Carrera el pico del ciclo de auge de luchas de la clase obrera se localiza en 1996, la evolución de la conflictividad obrera lo indica como el de menor cantidad de conflictos del período. Además, como señaláramos antes, es el año a partir del cual nunca se recuperarán los niveles de conflictividad registrados en 1992, 1993 y 1994. La mayor actividad huelguística de la CGT se localiza en los años 1995 y 1996, años de descenso de la cantidad de conflictos, mientras que la otra huelga del período se convoca en noviembre de 1992, cuando recién se inicia su aumento. Durante 1993 y 1994 - años de la mayor conflictividad de la década - la CGT no convoca ninguna huelga general.

Diferente es la situación cuando analizamos las huelgas generales convocadas por la CTA y el MTA. Por un lado, desde la convocatoria a la primera huelga en 1994, su actividad tiende a ser permanente, aún más allá de 1996, es decir, tienen un patrón de comportamiento similar al de la CGT ubaldinista en los años ’80. Por otro lado, la realización de la Marcha Federal – del 3 al 12 de julio de 1994 - y el llamado a la huelga general del 2 de agosto de ese año, coinciden con el año de mayor conflictividad del período y constituyen un intento por articular – hacia dentro y con otras fracciones sociales

- y centralizar un conflicto cuyo carácter esencial, como vimos, era su fragmentación. Entendemos que este es el pico del ciclo de luchas iniciado hacia el año 1992. Privilegiar la unidad de los cuadros sindicales como criterio de periodización conduce a errores cuando existe un desacople entre el comportamiento del grueso de la dirigencia sindical, nucleada en la CGT, y las tendencias del conflicto obrero.

El siguiente ciclo de auge que nos propone Iñigo Carrera es diciembre de 1999-diciembre de 2001. Aquí surgen algunos problemas adicionales. En primer lugar, como planteáramos antes, para estos años resulta difícil establecer una periodización de las luchas que abarque al conjunto de la clase obrera, sin caer en el peligro de atribuir al conjunto de la clase dinámicas que corresponden sólo a algunas de sus fracciones. En los años 1999 y 2000 hubo un ascenso de los conflictos protagonizados por trabajadores desocupados pero fueron años de muy baja conflictividad de los trabajadores ocupados, incluso, de caída respecto de los años 1997 y 1998. Sí se produjo un ascenso de los conflictos protagonizados por ambas fracciones en 2001 aunque con características que serán analizadas más adelante.

La actividad de las centrales sindicales durante estos años presentó a su vez algunas diferencias con años anteriores, en parte explicables por el alejamiento del PJ del gobierno nacional. Por un lado, la CGT experimentó una nueva fractura, constituyéndose una CGT disidente conducida por Hugo Moyano (MTA) pero que, además del MTA, incluía a varios sindicatos que en los '90 fueron parte de la CGT oficial (por ejemplo SMATA). Esta central continuó la política de confrontación desarrollada por el MTA y convocó a 8 de las 9 huelgas generales del período, además de varias movilizaciones. Por otro lado, la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, mostró una mayor predisposición para convocar a huelgas generales que durante los años '90. A pesar de ello, sólo llamó a 5 de las huelgas generales del período, ninguna con movilización, y no adhirió a ninguna de las movilizaciones convocadas por la CGT disidente. Tres de esas huelgas generales, además, las convocó en 2001, las dos últimas el 13 y el 20 de diciembre.[3] Al mismo tiempo, la ausencia de la CGT oficial en muchas de las huelgas y en todas las movilizaciones es un dato significativo. Todavía en junio de 2001, la CGT-Daer decidió no convocar a la huelga

[3] La huelga del 20 de diciembre fue en gran medida formal, ya que fue convocada por ambas CGT después de las 18 hs., cuando ya había renunciado De la Rúa. Sí tiene importancia la huelga del 13 de diciembre contra el bloqueo de las cuentas sueldo.

del 8 de ese mes impulsada por la CGT disidente, la CTA y la CCC, mientras intentaba negociar un pacto social con el gobierno.

Si bien en 2001 existe una mayor relación entre la acción huelguística de las centrales y el ascenso de la conflictividad, esta vuelve a ser más clara en los casos del MTA y la CTA que presentan una continuidad en sus estrategias desde el origen, y más difusa en la CGT oficial, donde se nucleaban, todavía, la mayoría de las organizaciones sindicales y los grandes sindicatos de servicios.

La comprensión de este desacople requiere de un análisis de las transformaciones en la relación estado-sindicatos-clase obrera.

C- Cambios en el comportamiento sindical

La crisis del modelo de sustitución de importaciones fue, al mismo tiempo, la crisis de un sistema de relaciones laborales que hacía de la lucha salarial el centro del enfrentamiento entre capital y trabajo y de su resultado un dato fundamental de la política económica. Esta forma de la lucha de clases se estructuró a través de un complejo de mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, en tanto que expresión coyuntural de la contradicción capital/trabajo. Se trató, entonces, de la internalización del antagonismo obrero en una lógica reformista de las concesiones centrada en la lucha salarial.

La integración funcional de los sindicatos a estos mecanismos institucionales fue el eje de la articulación entre sindicatos y estado que permitió el desarrollo de complejas estructuras burocráticas sindicales dependientes para su reproducción del desvío de una porción del plusvalor, fundamentalmente, a través del sistema de obras sociales. Los mecanismos de la lucha salarial eran, por lo tanto, un modo de canalización de la contradicción entre capital y trabajo y, al mismo tiempo, de la contradicción entre el desarrollo de esas complejas estructuras sindicales y el desarrollo contradictorio de la clase obrera al interior del capital. No es de extrañar, entonces, que la crisis de esa estrategia sindical haya dado lugar a una lucha al interior del sindicalismo alrededor de los modos de reintegración funcional de los sindicatos al estado.

Entre 1988 y 1989, el mecanismo salarial dejó de ser efectivo para canalizar la conflictividad obrera. El aumento nominal del salario afectaba aún más la ya deprimida tasa

de ganancia y el intento del estado de transformar la presión obrera en demanda efectiva, mediante políticas monetarias expansivas (emisión de derechos sobre plus valor futuro), ante el aumento de la desinversión, se transformaba en escalada inflacionaria y, por lo tanto, en caída del salario real. Este bloqueo a la vía salarial de resolución/despliegue de la lucha capital/trabajo se prolongó, después de 1991, debido al papel de los mecanismos de producción de plusvalor absoluto como estrategia competitiva del capital local y a su predominio desde 1995.

En 1989, la respuesta a esta crisis tendió a fracturar al sindicalismo - más allá de sus matices - en dos grandes posiciones. La CGT San Martín nucleaba a los sindicatos oficialistas que apoyaban la política de reformas neoliberales del gobierno justicialista. Este conjunto de sindicatos dirigido por el entonces denominado "grupo de los 15" – rápidamente, devenido en mayoritario en los convulsionados meses de febrero a julio de 1989 - impulsaban una reintegración funcional de los sindicatos al estado a partir de su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras. Esta capacidad sería el fundamento de un apoyo negociado al proceso de reformas que permitiría conservar espacios de decisión institucional y la defensa del sistema de obras sociales. Posteriormente, el aumento del desempleo y el empleo en negro y las rebajas de aportes patronales condujeron a la crisis del sistema e impulsaron una fuga hacia delante de esa lógica, llevando a la negociación de subsidios, al acceso a nuevas formas de canalización del plusvalor a través de AFJP'S y ART'S y, en algunos casos, a la participación en privatizaciones y la explotación directa de la fuerza de trabajo. Frente a esta estrategia se agrupaban los sindicatos de la CGT Azopardo – dirigida por Saúl Ubaldini – que, básicamente, defendían el viejo patrón de relaciones laborales y de integración funcional de los sindicatos al estado. La disolución de la CGT Azopardo, a fines de 1990, significó el predominio de la estrategia sindical neoparticipacionista que llevó adelante la CGT hasta 1999 y la CGT-Daer hasta 2001. Es esta estrategia la que permite comprender el sentido de la acción de la CGT en relación al estado y el desacople con los ciclos de conflictividad obrera. Por ejemplo, es imposible separar la seguidilla de huelgas generales de la CGT, en 1995 y 1996, de los intentos del gobierno de avanzar sobre el sistema de obras sociales; al mismo tiempo que el descenso de los niveles de conflictividad y, por lo tanto, su correlativa centralización, creaban mejores

condiciones para una demostración de las capacidades de control y movilización de la base obrera.

Sin embargo, la CGT no logró hallar una solución definitiva a la crisis sindical estabilizando una nueva articulación funcional a las instituciones estatales. Por un lado, el bloqueo de la vía salarial había tendido a hacer descansar la capacidad de control del conflicto laboral en mecanismos de carácter coercitivo: amenaza hiperinflacionaria, desempleo y fragmentación de la clase obrera pero que, al mismo tiempo, debilitaban el poder de negociación de las direcciones sindicales minando su capacidad de movilización. Por otro lado, en ausencia de mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, la tendencia a su crecimiento fragmentado y descentralizado - que atribuimos a las transformaciones en la composición de la clase obrera - amenazaba la capacidad de disciplinamiento de las bases y, con ello, la integración funcional de los sindicatos al estado. Esta sólo se sostuvo gracias a los relativamente bajos niveles de conflictividad laboral que caracterizaron al período.

Finalmente, hay que agregar la emergencia de los movimientos de desocupados. La creciente importancia de los conflictos protagonizados por estos sujetos, desde mediados de los ’90, ha autonomizado parcialmente la dinámica de los conflictos vinculados al mundo del trabajo del control de las cúpulas sindicales.

La trayectoria del MTA, por contraste, muestra la situación en la que la reestructuración del capital y la crisis del sistema de relaciones laborales de posguerra habían colocado al vandorismo. Entre 1989 y 2001, el vandorismo fue obligado a optar entre la confrontación (MTA) y la negociación (neoparticipacionismo), ya no como decisiones tácticas en el marco de una estrategia sino como una alternativa de hierro.

Sin embargo, las estrategias confrontacionistas – aunque claramente diversas en sus perspectivas políticas y modelos sindicales - del MTA, la CTA y la CCC adquirieron una mayor capacidad política a partir de los años 1996 y 1997 y, en especial, a partir de la llegada al gobierno de la Alianza. Este fenómeno se relaciona con las crecientes dificultades en el ejercicio de las funciones hegemónicas del estado desde 1996/1997. En el contexto del desarrollo de importantes cortes de ruta y puebladas en el interior del país y de la activación de los “sectores medios”, sobre todo en la capital, la acción del sindicalismo combativo - aunque en la mayoría de los casos involucrara a una fracción minoritaria de los

ocupados - tenía un mayor impacto político y capacidad de articulación con otros sectores sociales y políticos. Esto se expresó, inicialmente, en la mesa de enlace sindical y en su acción conjunta con asociaciones de pequeños y medianos empresarios de la industria, el campo y el comercio y en la posterior inclusión de la oposición política (UCR y FREPASO) en el espacio, lo que permitió la convocatoria del llamado "apagón y bocinazo" de setiembre de 1996, con una fuerte presencia de los "sectores medios". A partir del año 2000, después de la asunción del gobierno de la Alianza, esta capacidad política del sindicalismo opositor cobró mayor importancia con la incorporación de gremios industriales a la CGT disidente dirigida por el MTA y, fundamentalmente, con la tendencia a la apertura de la contradicción entre necesidades de valorización del capital y sus necesidades de legitimación, en el marco de la agudización de la crisis.

Conclusiones

Los efectos de las transformaciones en el modo de acumulación de capital desde 1989 y de los cambios resultantes en la composición de la clase obrera sobre las características y evolución del conflicto laboral, ponen en cuestión a las huelgas generales como indicador de los ciclos de conflictividad de los asalariados.

En primer lugar, porque, sobre todo desde mediados de la década del '90, las tendencias divergentes de la evolución de la conflictividad de ocupados y desocupados limitan la posibilidad de establecer una periodización común para todas las fracciones de la clase obrera.

En segundo lugar, porque a diferencia de los '80, en los años '90 se verifica un desacople entre la actividad huelguística de la cúpula cegetista y la evolución de la conflictividad obrera.

Este desacople entendemos que tiene origen en la crisis del sistema de relaciones laborales vigente durante el modelo de sustitución de importaciones, cuyos mecanismos de canalización del conflicto obrero centrados en la lucha salarial permitieron el desarrollo de estructuras sindicales vinculadas funcionalmente al Estado. En el marco de esta crisis ha pasado a ser predominante una estrategia sindical neoparticipacionista que, sin embargo, está lejos de resolver de modo estable la crisis sindical abierta en 1989.

Asimismo, la inscripción de la acción sindical en el nexo entre acumulación y hegemonía permite entender: A- el desacople entre la acción de la dirección cegetista y las tendencias de evolución del conflicto obrero y B- la paradoja de una mayor capacidad de intervención del sindicalismo opositor en el período de descenso de la conflictividad de los obreros ocupados. Sin embargo, no debe deducirse de lo expuesto que el sindicalismo opositor ganara en capacidad de disciplinamiento del conflicto y, particularmente, tuviera control de la creciente disposición a la lucha de los trabajadores desocupados. Si el crecimiento de las protestas de los desocupados en un marco de crecientes dificultades del estado para el ejercicio de sus funciones hegemónicas le dio mayor potencialidad política a su acción, al mismo tiempo, los mostraba incapaces de impedir las protestas o de decidir los momentos de su emergencia y de regular su intensidad.

Bibliografía

Astarita, Rolando (2004) *Valor, mercado mundial y Globalización*. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires.

Bonnet, Alberto (2008) *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989 – 2001*, Buenos Aires: Prometeo Libros.

Cotarelo, María Celia (2000) "La protesta en la Argentina de los '90" *en Herramienta Nº 12 Otoño de 2000 Buenos Aires.*

Iñigo Carrera, Nicolás (2002) "Las huelgas generales. Argentina 1983 – 2001: un ejercicio de periodización" en *PIMSA. Documentos y publicaciones 2001*. Buenos Aires: 2002.

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia (2001) "La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización" en *PIMSA Documentos y comunicaciones 2000*, Buenos Aires: PIMSA.

Piva, Adrián (2009) "Acumulación de capital y hegemonía en Argentina (1989 – 2001)", Tesis doctoral, mimeo.

Schuster, Federico et al (2006) *Transformaciones de la protesta social en la Argentina 1989 – 2003*, Documento de trabajo n° 48, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Sociales "Gino Germani" – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires.

Villanueva, Ernesto (Coord.) (1994) *Conflicto obrero. Transición política, conflictividad obrera y comportamiento sindical en la Argentina 1984 – 1989*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.